QUEJA N°: 009/2014-Tula

QUEJOSO:*****.

AUTORIDAD:ELEMENTOS DE LA
COMANDANCIA DE LA POLICIA MINISTERIAL
EN JAUMAVE, TAMAULIPAS.

RECLAMACIÓN: VIOLACIONES AL DERECHO A
LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.

RESOLUCIÓN:RECOMENDACIÓN.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas a los 16 días del mes de
Noviembre del año dos mil catorce.

Visto para resolver el expediente número 009/2014-Tula,
iniciado con motivo de la queja presentada por la C. ***** , en contra de
actos presuntamente violatorios de derechos humanos imputados
a elementos de la Policía Ministerial en Jaumave, Tamaulipas, mismos actos
que se han calificado como violaciones al derecho a la Legalidad y
Seguridad Jurídica bajo la calificativa de indebida procuración de justicia,
por lo cual una vez agotado el procedimiento, se resuelve de conformidad
con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Tamaulipas, recepcionó la queja de la C. ***** , por los siguientes hechos:

*“Que deseo interponer queja en contra de elementos de la
Policía Ministerial del Estado, destacamentos en Cd. Tula,
Tamaulipas, ya que no han ejecutado la orden de aprehensión en
contra del Sr. ***** , ya que dicho individuo asesinó a mi hermano
***** en el Ejido San Vicente, Municipio de Palmillas, Tamaulipas en
fecha 20 de mayo del año próximo pasado; hechos que tomó
conocimiento la Agencia del Ministerio Público Investigador de
Jaumave, Tamaulipas dentro de la averiguación 028/2013, misma que
estando integrada fue consignada en fecha 11 de junio del 2013, al
Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tula, Tamaulipas, llevándose*

*el proceso penal número 013/2013 en el cual en fecha 18 de Junio del 2013 se obsequió la orden de aprehensión en contra del Sr. ***** y a la fecha no ha sido detenido la referida persona, a pesar de que cuentan con una fotografía y datos de localización que les hemos dado la suscrita y mi señora madre ***** y he sabido por algunos pobladores de la región de Tula, Tamaulipas que lo han visto paseando en ese municipio y que las autoridades no hacen nada por detenerlo; por lo que solicito a este Organismo de Derechos Humanos se investigue el motivo por el cual no han ejecutado la orden de aprehensión...”*

2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, radicándose con el número 009/2014-Tula y se solicitó a la autoridad señalada como responsable un informe en relación a los hechos denunciados, así como la documentación que se tuviese a su alcance respecto al caso en concreto, misma que se pronunció al respecto señalando:

“... tengo a bien informar a Usted que dichos hechos ya no corresponden a ésta Comandancia a mi cargo, ya que a partir del mes de Octubre del 2013, la Jefatura de Grupo de Jaumave, Tamaulipas pasó a ser comandancia, siendo su jurisdicción territorial los municipios de Palmillas y Miquihuana, Tamaulipas, por tanto, los hechos de los cuales se duele la quejosa de referencia ya no competen a esta Comandancia y por ende mi jurisdicción territorial ya que acontecieron en el municipio de Palmillas, Tamaulipas...”

3. Mediante oficio número 129/2014 de fecha 14 de mayo del 2014 el Comandante de la Policía Ministerial de Jaumave en el Estado, rindió informe, mismo que a continuación se transcribe:

“... Primeramente deseo manifestarle que desde que arribamos a esta comandancia de la Policía Ministerial nos dimos a la tarea de sacar adelante el rezago en cuanto a ordenes de APREHENSIÓN se refiere y logramos establecer en los trabajos de inteligencia realizados por los Elementos de esta comandancia, que dicha persona la cual

*responde al nombre de ***** el cual tiene una orden pendiente por el delito de HOMICIDIO, se encuentra en un rancho en la sierra entre Palmillas y Ocampo. Así mismo le manifiesto que cuando me entrevistaste con la C. *****; quedó formalmente a través de conocidos que en el momento en el que tuviera algún dato preciso se comunicaría a esta comandancia o al celular particular del Suscrito, a lo cual no hemos recibido ningún llamado en la misma y por lo que se refiere al indiciado lo han visto en la ciudad de Tula, Tamaulipas de la misma manera nos hemos comunicado con la C. *****; para manifestarle que nos llame a nosotros para comunicarnos con nuestros homólogos de la ciudad de Tula y tampoco hemos recibido alguna respuesta por lo cual ignoro el porqué de su actitud. Ahora bien así mismo le manifiesto que nosotros hemos seguido realizando el trabajo de inteligencia para saber la ubicación exacta del indiciado y nos entrevistamos con un primo de la hoy quejosa quien si está colaborando con nosotros para realizar un operativo con el apoyo del ejército toda vez que en el entendido de que dicho sujeto que sabemos se encuentra en la sierra al ver nuestra unidad se internara para esconderse de nosotros pero ya obtuvimos la colaboración del Ejército, ya que de ellos no espera una reacción y solo estamos esperando que el primo de la C. ***** nos proporcione la ubicación del Rancho en el cual presuntamente se encuentra escondido el C. *****; con lo anteriormente narrado quiero manifestarle que no escatimaremos esfuerzos por parte del suscrito y elementos que componen esta Comandancia, hasta lograr la captura de éste peligroso sujeto...”*

4. Con copia del informe rendido por la autoridad señalada como presunta responsable, se dio vista a la parte quejosa para que expresara lo que a sus intereses conviniera y en el mismo acto se ordenó la omisión de apertura al periodo probatorio en razón de no considerarlo necesario.

5. Pruebas desahogadas en el procedimiento.

5.1. Pruebas obtenidas por esta Comisión:

5.1.1. Documental consistente en copia certificada del oficio número 042 de fecha 18 de junio del 2013, signado por el C. Agente del Ministerio Público Adscrito, mediante el cual se libró ORDEN DE APREHENSIÓN en contra de *****, por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de quien llevaba en vida el nombre de *****.

6. Una vez agotado el período probatorio, el expediente quedó en estado de resolución y de cuyo análisis se obtuvieron las siguientes:

CONCLUSIONES

Primera. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, es competente para conocer la queja presentada por el C. ***** por tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorias de derechos humanos imputados a servidores públicos que actúan en la entidad, al tenor de lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

Segunda. “Causales de Improcedencia”. Por ser una cuestión de orden público, esta autoridad se ha dado a la tarea de analizar la procedencia de la vía, ya sea que lo hagan valer las partes o que se advierta de oficio de acuerdo con los artículos 9 y 30 de la ley que rige el funcionamiento de este Organismo; en ese sentido, es de destacarse que las partes no hicieron valer cuestiones de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna causal de esta naturaleza.

Tercera. En principio, es necesario apuntalar que en su queja inicial, la C. ***** expresa básicamente un concepto de violación de derechos humanos, a saber, su derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, bajo la calificativa de dilación en la procuración de justicia por parte de elementos pertenecientes a la Policía Ministerial del Estado, destacamentados en Jaumave, Tamaulipas.

Derivado de lo anterior y a juicio de ésta autoridad resolutora, se considera pertinente exponer diversas consideraciones que surgen de una clara y lógica ilación de hechos constatados en distintos actos dentro del procedimiento de queja instaurado por ésta Comisión, empezando por mencionar que el motivo de la misma manifestado en el expediente citado al rubro es la inejecución de una orden de aprehensión dictada en contra del C. *****, misma que a pesar de continuar vigente no ha sido ejecutada sin que a la fecha la autoridad justifique el porqué de su omisión.

Ahora bien, ésta Comisión procede a otorgar valor probatorio pleno a la documental contenida en oficio 097/2014 de fecha 12 de marzo del 2014 por medio de la cual, el Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tula, Tamaulipas, solicita al Comandante de la Policía Ministerial con ejercicio en Jaumave, Tamaulipas informe sobre el incumplimiento en la ejecución de la orden de aprehensión, manifestando textualmente que “hasta la fecha han transcurrido ocho meses sin que se haya cumplimentado dicha orden”. Acreditando con esto la dilación en la impartición de justicia por los servidores públicos por ésta vía denunciados.

Es así que realizando una conexión de hechos se asienta que la orden de aprehensión, fue inicialmente solicitada mediante oficio 672/2013 en fecha 17 de Junio del 2013 y posteriormente mediante oficio de fecha 12 de marzo del 2014 se solicitó a la autoridad policiaca tuviese a bien informar el motivo por el cual no había ejecutado la multicitada orden de aprehensión, en virtud de que hasta esa fecha habían transcurrido **ocho meses** desde que fue librada por el Juez Mixto de Primera Instancia de Jaumave, Tamaulipas.

En razón del anterior requerimiento, el Comandante de la Policía Ministerial en Jaumave, Tamaulipas informó en fecha 22 de abril de 2014 que se encontraba encargado de dicha comandancia desde el 1° de Octubre del 2013, y que al tener conocimiento de dicha orden de aprehensión se trasladó al municipio de Palmillas, Tamaulipas y realizó investigaciones que le hacen pensar que el indiciado se encontraba en las inmediaciones de la Sierra en ese municipio, por lo cual espera la ocasión propicia para poder trasladarse a dicho punto de ubicación y lograr la captura del indiciado; lo anterior, sin que a la fecha haya tenido avance alguno.

Con lo anterior, se ha dilucidado que la autoridad hasta la fecha, no ha sido capaz de acreditar:

- (i) Haber realizado operativo alguno con la finalidad de aprehender al indiciado ;
- (ii) Haber realizado labores de inteligencia a efecto de obtener datos de localización e identificación del mismo;

- (iii) Haber hecho las gestiones necesarias para proveer de plena y legal ejecución dicha orden de aprehensión.

Y si por el contrario, se ha puesto de manifiesto una clara y dolosa omisión en la inejecución, misma que provoca un daño en la esfera jurídica del quejoso, debido a que el no actuar de la autoridad, es decir, la negación a ejercer sus atribuciones en aras de proteger el bienestar del impetrante de derechos, resulta un claro agravio a su derecho a la legalidad y seguridad jurídica puesto que no existe hoy en día una certeza tal que lleve a pensar al quejoso que la autoridad ha estado realizando el mínimo esfuerzo por hacer uso de sus atribuciones y detener al indiciado, poniendo en una situación de total vulnerabilidad al gobernado frente a los actos de delincuencia.

Cuarta. Por lo que hace al único concepto de violación hecho valer por la impetrante, es decir la violación a su derecho de legalidad y seguridad jurídica, resulta de fundamental relevancia definirlo como aquel derecho a que las leyes aplicables sean dictadas por razones de interés general y en función del bien común. Toda ley debe ser creada de acuerdo con los procedimientos y por los órganos establecidos en la Constitución y a ésta deben ajustar su conducta, de manera estricta, todas las autoridades públicas. En relación a esto, nos permitimos exponer:

**CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.**

Artículo 16 párrafo IV. *La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculcado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.*

Artículo 17. *Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.*

Sirve de apoyo a lo anterior, la presente tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que a la letra nos dice:

Época: Décima Época

Registro: 2001213

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2

Materia(s): Constitucional

Tesis: VI.1o.A. J/2 (10a.)

Página: 1096

ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL

RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine

o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia.

En el caso que hoy nos ocupa, es importante recalcar que nuestras autoridades estatales de acuerdo a las leyes que rigen su proceder, tienen la obligación de actuar en concordancia con lo establecido por nuestra legislación ordinaria vigente respetando siempre el marco legal referente a los derechos humanos, lo anterior queda de manifiesto en la siguiente exposición:

LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

ARTÍCULO 5°.- *Los servidores públicos que integran la Procuraduría regirán su actuación con base en los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.*

ARTÍCULO 70.- *Los Agentes del Ministerio Público así como de la Policía Investigadora, de la Policía Ministerial y, en lo conducente, los Peritos, tendrán las siguientes obligaciones:*

I. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos;

Por lo anterior, es importante el puntualizar que de acuerdo a la legislación estatal vigente en materia de seguridad pública e impartición de justicia, la autoridad responsable se encuentra dotada de diversas atribuciones en su actuar, las cuales entre otras cuestiones, le permiten ejecutar ordenes de aprehensión en cumplimiento a los acuerdosjurisdiccionales emitidos al respecto; lo anterior conforme a lo establecido por nuestra legislación estatal vigente, misma que nos permitimos exponer:

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ARTÍCULO 7°.-*Al Ministerio Público del Estado le compete el ejercicio de las siguientes atribuciones:*

I. La función de seguridad pública relativa a la investigación y persecución de los delitos, que comprende:

B) En la etapa del proceso penal ante el órgano jurisdiccional:

1. Aportar las pruebas y promover las diligencias conducentes para el debido esclarecimiento de los hechos presuntamente delictuosos, las circunstancias en que se hubiesen cometido y las peculiaridades del inculpado, de la responsabilidad penal, y de la existencia de daños y perjuicios y la fijación del monto de su reparación;

9. Promover todo lo conducente al desarrollo expedito e imparcial de los procesos;

II. Atender y proteger a la víctima y al ofendido por un delito, que comprende:

10. Ejercer las acciones a favor o en beneficio de víctimas y ofendidos previstas en las disposiciones legales aplicables;

ARTÍCULO 60.-*La Policía Investigadora tendrá las siguientes atribuciones:*

XV. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia o presentación, así como a los demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales que se les encomiende por la autoridad competente, siempre y cuando se circunscriban a las atribuciones de la dependencia;

ARTÍCULO 71.-*Además de lo dispuesto en el artículo anterior, los Agentes de la Policía Investigadora y de la Policía Ministerial tendrán las siguientes obligaciones particulares:*

V. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales que le sean asignados, así como aquellos de los que tenga conocimiento con motivo de sus funciones y en el marco de sus facultades;

REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

ARTÍCULO 59.- *Son atribuciones del Director de la Policía Ministerial:*

V.- Disponer y controlar la ejecución de la orden de detención que dicten los Agentes del Ministerio Público y las órdenes de aprehensión, reaprehensión y de cateo que emitan los órganos jurisdiccionales;

ARTÍCULO 52.- *Son atribuciones de la Policía Ministerial, las siguientes:*

VII.- Ejecutar la orden de presentación, detención, comparecencia, orden de aprehensión o reaprehensión y arrestos, dictada por el Ministerio Público o la autoridad judicial y llevar su registro;

En efecto, de los numerales transcritos anteriormente se desprenden las atribuciones que la ley ha conferido a los organismos de seguridad en el Estado refiriéndonos en el caso que hoy nos ocupa a la ejecución de orden de aprehensión emitida por un órgano jurisdiccional.

Ahora bien, la C. ***** en su escrito inicial de queja se duele de la inejecución de la orden de aprehensión emitida dentro del expediente 13/2013 librada en fecha 18 de Junio del 2013, por el Juez Mixto de Primera Instancia de Tula, Tamaulipas; misma que fue encomendada para su ejecución al C. Luis Alberto Ibarra Rivera quien funge como Comandante de la Policía Ministerial del Estado con destacamento en la Jaumave, Tamaulipas.

De igual forma, ésta Comisión ha valorado la substanciación del expediente en su totalidad, incluyendo los informes otorgados por

lapresunta autoridad responsable, misma quien en su oficio 129/2014 de fecha 14 de mayo del presente año rinde el siguiente informe:

*“... Por lo que primeramente deseo manifestarle que desde que arribamos a esta comandancia de la Policía Ministerial, nos dimos a la tarea de sacar adelante el rezago en cuanto a ordenes de APREHENSIÓN se refiere y logramos establecer en los trabajos de inteligencia realizados por los elementos de esta comandancia, que dicha persona la cual responde al nombre de ***** el cual tiene una orden pendiente por el delito de HOMICIDIO, se encuentra en un rancho en la sierra entre Palmillas y Ocampo...”*

No hay que olvidar que los elementos de la Policía Ministerial tienen una función de gran importancia en la aprehensión de los probables responsables de la comisión de un delito para evitar que éstos se sustraigan a la acción de la justicia y queden impunes, y que al no cumplir con su obligación, no sólo incurren en una grave responsabilidad por el ejercicio indebido del servicio público ; sino que además, con esa omisión se propicia un vacío de poder que ninguna otra instancia puede suplir o colmar, ya que las atribuciones que la norma jurídica reconoce a cada autoridad en concreto, sólo pueden ser ejercidas por éstas.

Por lo cual, del informe transcrito en párrafos anteriores, se desprende que la autoridad misma nos pone de manifiesto el hecho de que los trabajos de inteligencia que han realizado (i) fueron iniciados un año después de liberada la orden de aprehensión y (ii) los dotaron de pleno conocimiento sobre los datos de localización del indiciado. Es por esto, que a consideración de ésta Comisión resulta inverosímil que no se hayan materializado los esfuerzos hechos por nuestras autoridades encargadas de la procuración de justicia en el Estado y por el contrario resulta evidente la

falta de voluntad y acciones encaminadas a buscar la verdad y permitir el acceso a la justicia a la impetrante de Derechos Humanos.

Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el expediente que nos ocupa, se advierte que la orden de aprehensión girada en contra del C. ***** no ha sido cumplimentada hasta la fecha, circunstancia que pone de manifiesto la vulneración de esfera jurídica del ofendido, toda vez que no ha sido proveído de justicia oportuna en virtud del incumplimiento del mandamiento judicial antes citado, el cual tiene por objetivo poner al indiciado a disposición del órgano jurisdiccional requirente para que se lleve a cabo el proceso penal correspondiente y en su oportunidad dicho órgano se pronuncie sobre la culpabilidad o inocencia del mismo.

Anterior circunstancia imputable a los servidores públicos citados con anterioridad, toda vez que si bien es cierto que en relación a la ejecución del mandamiento que nos ocupa, los servidores públicos han informado que se encuentran en la disposición de atender el rezago existente en materia de ordenes de aprehensión a su cargo, no menos cierto es que los mismos han manifestado conocer los datos de localización del indiciado como resultado de sus labores de inteligencia y que dicha orden de aprehensión no ha sido ejecutada en más de un año; siendo de igual manera necesario señalar que los agentes de la Policía Ministerial deben realizar las acciones necesarias tendientes a obtener información referente al paradero de las personas en contra de las cuales se giró algún mandamiento judicial, debiendo utilizar los mecanismos y técnicas de investigación conducentes para tal fin.

Sin embargo, hasta este momento, los servidores públicos mencionados no han acreditado haber realizado una operación para cumplimentarla orden de aprehensión, sino únicamente conocer el domicilio del inculpado, lo cual no solamente ha dilatado sino paralizado el proceso jurisdiccional encaminado a otorgar justicia pronta a la víctima del delito y en su caso la reparación del daño de acuerdo a nuestra legislación vigente. De igual manera, es importante señalar que el actuar de la autoridad ha sido omiso lo cual ha situado a la quejosa en un estado total de indefensión y daño en su esfera jurídica fundamental, lo anterior en virtud de la inoperancia injustificada por la ahora autoridad responsable.

Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió en la *Recomendación General 14, "Sobre los derechos de las Víctimas de Delitos"*, que el tratamiento deficiente e indigno a la víctima u ofendido es frecuente y deriva, por ejemplo, de irregularidades en el trámite de la indagatoria, falta de asesoría jurídica oportuna a las víctimas, insuficiencia de medios materiales y humanos para realizar la investigación, falta de fundamentación y motivación en la negativa a realizar diligencias, omisión de brindar auxilio oportuno y efectivo para garantizar la seguridad de las víctimas, familiares o testigos, una falta de control y supervisión de la integración de las averiguaciones y dilación de las mismas, entre otros.

Por último y con base en lo expuesto y considerando que el tercer párrafo del artículo 1º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Estado mexicano la obligaciones de prevenir las violaciones de derechos humanos, y de ejercer las acciones de investigación, sanción y reparación de éstas, se solicita a la institución recomendada que como medida de prevención y garantía de no repetición,

se les instruya a dichos servidores públicos para que desarrollen sus funciones apegados al marco legal y en estricto respeto a los derechos humanos.

Así mismo, en lo relativo a la obligación de reparar la violación de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la reparación de la violación a los derechos humanos no se limita al daño material, sino que también deben considerarse aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios, esto es, lo que definió como daño moral o inmaterial, sobre este concepto ha establecido lo siguiente:

Que el mencionado daño moral puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y otras perturbaciones que no son susceptibles de medición pecuniaria.

Que debido a que las expresiones de daño moral no es posible asignarles un precio equivalente monetario, solo pueden, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras:

Mediante el pago de una suma de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que se determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad; y mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su

dignidad, la consolución de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir.

Quinta. Una vez concluida la investigación, se llegó a la convicción de que existieron violaciones a los derechos humanos en perjuicio de la C. *****, en relación a la inejecución injustificada de la orden de aprehensión citada a lo largo de la presente resolución.

En ese tenor, el artículo 102 Apartado B constitucional, reconoce la existencia y competencia de las Comisiones de Derechos Humanos, como órganos encargados de la protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, instituciones que tienen como objetivo entre otros, buscar que se tomen medidas para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y, en su caso, la reparación de daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, han establecido la obligación que tienen los Estados de reparar el daño a las víctimas de violaciones a Derechos Humanos.

En el Sistema Universal de Protección a Derechos Humanos se han desarrollado los *Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional* mientras que en el Sistema Interamericano la propia Convención Americana dispone esta obligación en su artículo 63.1, al señalar la obligación de

garantizar al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados, y al establecer la obligación de reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la violación de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Dentro de la jurisprudencia que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha dado contenido y alcance a esta obligación desde el Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, que fue la primera sentencia que emitió en 1988.

Por otra parte, a partir de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, el artículo 1º establece expresamente la obligación de reparar la violación a derechos humanos. Por lo cual, derivado de esta obligación, se publicó la Ley General de Víctimas, la cual da contenido a esta obligación recogiendo los estándares que se han desarrollado en los sistemas internacionales de protección a derechos humanos.

En relación al derecho que tienen las víctimas de violaciones a derechos humanos de recibir una reparación integral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que:

“Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, la cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los instrumentos internacionales ratificados por México y de los criterios de organismos internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado respecto a la obligación de reparar, y ha

manifestado que ésta se regula en todos sus aspectos por el derecho internacional, invocando disposiciones de derecho interno. El Máximo Tribunal Interamericano ha establecido que la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere plena restitución, lo que consiste en el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo, así como el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados”. Jurisprudencia: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXXIII, Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número LXVII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil 10-diez.

No se debe olvidar que en el tema de reparaciones de violaciones a derechos humanos, se debe de pensar desde la perspectiva de la integralidad de la personalidad de la víctima, y teniendo presente su realización como ser humano y la restauración de su dignidad. Las modalidades de reparación del daño que existen y que se han desarrollado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que han quedado ya establecidos en la Ley General de Víctimas son las siguientes:

a) Restitución.

En este sentido los mencionados “*Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*” establecen en su párrafo 19:

“La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas

internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes.”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos por su parte, ha señalado que requiere, siempre que sea posible, la plena restitución; la cual, como mencionamos, consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. En el caso específico, resulta posible subsanar el daño tanto material e inmaterial causado al quejoso, mediante la puesta en acción de las aludidas autoridades encargadas de procuración y administración de justicia, con la finalidad de que se aprehenda al probable responsable de la comisión del delito restituyendo así el ejercicio del derecho de acceso a la justicia en favor del quejoso.

b) Indemnización.

En atención al párrafo 20 de los Principios citados:

“La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.”

c) Rehabilitación.

La rehabilitación ha de incluir la atención médica y psicológica, así como los servicios jurídicos y sociales.

d) Satisfacción.

Ésta debe incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes: a) medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones; b) la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad; c) una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima; d) una disculpa pública; y e) la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones.

E) Garantías de no repetición.

Las autoridades, con la finalidad de que se garantice la no repetición de los actos analizados en el presente caso, deben integrar a la capacitación y profesionalización de los funcionarios públicos a su cargo, el tema de los derechos humanos como un método de prevención ante futuras violaciones en perjuicio de todos los sujetos a dichas prerrogativas; así como la adecuación de prácticas institucionales y de políticas gubernamentales para que éstas se desarrollen siempre desde una perspectiva de respeto y garantía de los derechos humanos.

En congruencia de lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 102 inciso B; 20 inciso C. de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 1, 4 párrafo II punto I, II, III, VII, XXXVI, 10, 18, 26, 61 fracción I, 64 fracción II, 73 fracción III, IV, V, 74 fracción II, 120 fracción II, III, IX y 126 fracción VIII de la Ley General de Víctimas en relación con lo establecido en los numerales 1, 3,4, 8, 21,22, 23, 28, 29, 30 fracción II pertenecientes a la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Tamaulipas; así como lo preceptuado por los artículos 3 fracción VIII, 6 fracción IV Y 9 pertenecientes al Código de Procedimientos Penales para el Estado y 3, 8 fracción V, 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas; se emite la siguiente:

R e c o m e n d a c i ó n

Primera: Se emite RECOMENDACIÓN al Procurador General Justicia del Estado de Tamaulipas, solicitándole respetuosamente gire sus instrucciones escritas a quien corresponda, a fin de que los servidores públicos que tienen a cargo la orden de aprehensión en contra del C. ***** procedan a dar cumplimiento a dicho mandato judicial, en el entendido de que deberán de hacer uso de los recursos legales, técnicos y de inteligencia con los que cuenta esa institución para su búsqueda, localización, aprehensión y presentación ante la autoridad jurisdiccional recurrente a la brevedad, todo lo anterior cumpliendo siempre en estricto apego a la normatividad en materia de derechos humanos del indiciado.

Segunda: Instruya al Órgano de Control Interno de la Procuraduría a su cargo a fin de que a través del procedimiento administrativo correspondiente, se investigue la conducta asumida por los funcionarios públicos cuyas conductas motivaron este pronunciamiento y de resultar procedente se imponga la sanción que les resulte; lo anterior sin

perjuicio de que se remitan las constancias por medio de las cuales se acredite de manera fehaciente el cumplimiento del presente punto.

Tercera: Como medida de prevención y garantía de no repetición, gire las instrucciones necesarias encaminadas a que se instruya a quien corresponda, para que se diseñen e impartan programas integrales de capacitación y formación, a fin de promover la actualización y especialización de los Comandantes de Policía Ministerial en el Estado que no hayan sido capacitados, específicamente en materia de atención a víctimas de algún delito, temas relativos al respeto de los derechos fundamentales con relación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como obligaciones internacionales de derechos humanos derivados de los tratados de los cuales es parte nuestro país, con la finalidad de que en lo sucesivo, realicen sin excepción alguna, investigaciones inmediatas, ágiles y exhaustivas, siempre velando por el interés de la víctima, acatando los principios que rigen en el servicio público, solicitando que dicho cumplimiento sea enviado a éste Organismo mediante indicadores de eficiencia para evaluar el impacto efectivo de la capacitación que se aplique al personal que los reciba.

Cuarta: En lo relativo a la obligación de reparar la violación de Derechos Humanos, se le solicita realizar un acto que transmita un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de Derechos Humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir como reparación a las violaciones de Derechos Humanos que se destacaron en ésta resolución.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, solicítase a la autoridad recomendada que dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la presente resolución informe a éste Organismo si acepta o no la recomendación formulada y en su caso enviar dentro de los 15 días siguientes las pruebas de que se ha iniciado su cumplimiento.

Así lo formuló el C. Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Doctor José Ramiro Roel Paulín, y aprueba y emite el C. Doctor José Martín García Martínez, Presidente de ésta Comisión, en términos del artículo 22 fracción VII, 25 fracción V, de la Ley que regula el funcionamiento de éste Organismo, así como el 22 fracción VII, 27 y 69 fracción V de su Reglamento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

Dr. José Martín García Martínez
Presidente

Dr. José Ramiro Roel Paulín
Primer Visitador General

Proyectó:
Lic. Víctor Manuel Fuentes Cortés.
Visitador Adjunto

L`VMFC/egt